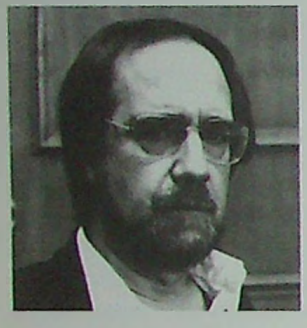
LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA, EL GOLPE MILITAR Y EL PROYECTO CONTRARREVOLUCIONARIO[1]



MANUEL ANTONIO GARRETON

Manuel Antonio Garretón Merino es sociólogo titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en la Ecole des Hautes Etudes de Francia. Fue Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en 1964 y Director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN). Autor de una quincena de libros, ha sido profesor invitado en Oxford, la Universidad de Chicago y la Ecole de Hautes Etudes, por citar algunas. Miembro del Joint Committee on Latin American Studies del Social Science Research Council. Asesor y consultor de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente es Profesor Titular y Director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.

NOTA INTRODUCTORIA

La visión que quiero desarrollar se aleja de aquélla que ve la historia como un conjunto de acontecimientos desencadenados por los malos, frente a los cuales a los buenos no les toca otra cosa que reaccionar, porque son víctimas de los malos y una especie de "boys-couts" siempre listos para hacer el bien, que los malos les impiden realizar. Creo que hay que evitar esa visión de la historia. No hay que evitar el juicio ético, pero hay que apartarse de la idea de que los portadores del bien están en un lado y los portadores del mal están en el lado opuesto. Con esa visión podremos denunciar, pero no comprender.

En todas las grandes crisis sociales y nacionales, el barro les llega a todos y no sólo a algunos. Ya no existe el mundo de los que pasan con una flor en la mano en medio del campo de la batalla. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como nación para asumir las responsabilidades colectivas, sin que eso implique que no digamos lo que pensamos respecto a la responsabilidad de cada cual.

EL TRIPLE SIGNIFICADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Personalmente, veo en el tema tres aspectos distintos. El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar, del golpe de Estado, es, a mi juicio, tres cosas diferentes:

a) la culminación de una crisis de la democracia y, por consiguiente, del sistema político;
b) un golpe de Estado, esto es, una insurrección; y
c) el inicio de un proceso revolucionario o contrarrevolucionario encabezado por el poder militar.

Entre el primer aspecto y los otros dos no hay relación de necesidad. Habia otras soluciones a la crisis existente. El golpe militar no era estrictamente inevitable y necesario. Creo, sin embargo, que entre el segundo y el tercer punto, sí existe una relación de necesidad. No se podia dar el golpe militar, no podia haber un golpe de Estado, si no habia consecuentemente Régimen Militar, un Estado del golpe, como lo han llamado algunos, aunque sus detalles

Concentración de la CUT. 'No a la guerra civil'.

más precisos no hubieran sido previstos. Y era evidente que este golpe militar iba para largo, que no se estaba dispuesto a regresar a la situación anterior de inmediato. Existe una relación de necesidad entre el golpe y lo que vendrá después, que aún no estaba enteramente diseñada. Pero insisto en que no hay una relación de necesidad entre la crisis de la democracia y el golpe y el proyecto revolucionario posterior.

El 11 de septiembre se derrumba un sistema político, el régimen democrático chileno, y yo me referiré básicamente a eso, no a los otros aspectos de la crisis , como las dimensiones económicas u otras.

FORTALEZAS DE LA DEMOCRACIA CHILENA

La democracia política chilena había sido exitosa en resolver ciertos problemas, y había dejado pendiente otros, con lo cual arrastraba una crisis latente.[2]

Entre los problemas que había resuelto de algún modo -sobre todo si tomamos el contexto de los países latinoamericanos como medida de comparación- estaba en, primer lugar, el de la estabilidad: desde los años treinta aquí no había ciclos recurrentes de democracia y autoritarismo, como los había en otros países.

En segundo lugar, se había resuelto el problema de la representatividad. En Chile existía un sistema político partidario en el cual prácticamente todo el espectro político-ideológico estaba representado de algún modo, y a veces por más de una opción organizacional. Llamo la atención sobre este punto, porque un gran problema en países como Argentina es que nunca hubo un importante partido de derecha, y en otros, particularmente centroamericanos, fue la exclusión institucional de la izquierda. En el caso chileno, teníamos un sistema político con espectro completo. En ese sentido, se resolvía bien el problema del pluralismo y de la representación ideológica-política. Por supuesto que esto tenía un precio. Hasta finales de los años 50 votaba sólo un porcentaje de la población, porque no todo el mundo estaba incorporado. Piénsese que el voto de las mujeres también es bastante tardío. Pero se podría afirmar que, por lo menos, había una democracia que resuelve el problema de la estabilidad y de la representatividad.

Por otra parte, el régimen político imperante también había resuelto el problema de la efectividad. Es decir, el gobierno gobernaba; bien o mal, pero lo hacía. Hay gobiernos que no gobiernan, que no logran hacer lo que quieren hacer. En el caso de Chile, los gobiernos gobernaban, por supuesto que con algunos problemas, como la inestabilidad de las políticas públicas y la incapacidad de generar gobiernos mayoritarios. Pero teníamos un régimen democrático relativamente estable, representativo y efectivo y que, además, se demostró capaz de resolver institucionalmente los conflictos y de ser el lugar privilegiado de canalización de las demandas sociales; por supuesto, de las que llegaban a él.

Tanto es así que ésta es una de las razones por la que las FFAA no intervenían. Porque las élites dirigentes eran capaces de negociar, de concertarse y tener un sistema institucional que les permitía resolver sus problemas, sin necesidad del recurso de apelar a los unifor-

mados, como era el caso de casi todos los regímenes políticos de América Latina.

Sin embargo, existían problemas pendientes, importantes, que son los que le dan a la situación un carácter de crisis latente.

DEBILIDADES Y CRISIS LATENTE

¿Cuáles eran los principales problemas no resueltos que arrastraba la democracia política chilena?

El primero de ellos resulta de la estructuración de la sociedad, la que no es efecto de buena o mala intencionalidad original, sino de un complejo desarrollo de diversos factores, en la cual el sistema político partidario absorbe al conjunto de la sociedad civil. Era un país con un fuerte sistema político, pero con una sociedad civil débil. Esto presenta al menos dos aspectos. Por un lado, los conflictos políticos se trasladan rápidamente al conjunto de la sociedad (por ejemplo, el filtro político- ideológico para cargos en instituciones autónomas como las universidades). Todos los conflictos eran de algún modo reflejo de conflictos políticos. La sociedad no era autónoma, sino que absorbía los conflictos que venían del mundo político. Por otro lado, los actores principales en esto son los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos, lo que podríamos llamar la clase política-intelectual, son muy fuertes, tienen tendencia a la automatización de la sociedad. Y esa tendencia -que es relativa, por cuanto finalmente está controlada por un sistema de elecciones periódicas- se traduce fundamentalmente en que la clase política dirigente es la que inventa el país. Es decir, el sistema político representativo tiende a convertirse en un mundo cultural cerrado. En Chile, un partido político era mucho más que un partido: era una forma de vida, una manera de vestirse, una manera de cantar y de hablar en que cada uno tenía su propio lenguaje y cosmovisión. El problema es que la tendencia a inventar mundos distintos cuando se está en concepciones globalistas cerradas es muy grande. Por lo tanto la tendencia a la polarización es también muy grande.

El efecto más importante que se deriva de esta estructuración de la sociedad es que, si bien se trata de una sociedad políticamente "viable" o "gobernable" porque el sistema político partidista era representativo, subsiste una crisis latente, porque si en algún momento se destruye el consenso de negociación dentro de la clase política dirigente, la sociedad entera queda inerme.

El segundo problema es que no existía una institucionalidad que garantizara gobiernos democráticos mayoritarios estables. El drama Presidente versus Congreso era permanente. Teníamos un sistema presidencialista en el cual desde el Ejecutivo se podían promover los grandes proyectos revolucionarios; y cuando digo proyectos revolucionarios no aludo solamente a la izquierda sino a todos los movimientos políticos, porque en la última elección de 1970 se presentaron tres proyectos revolucionarios, uno de los cuales, el programa de la Nueva República (nótese el carácter revolucionario del nombre) fue dirigido por don Pablo Baraona.

Pero, el sistema de gobierno no garantizaba gobiernos mayoritarios para proyectos de tanta envergadura. Por lo tanto, había una gran posibilidad de inestabilidad política dentro del régimen mismo. No teníamos una institucionalidad que obligara a coaliciones. Podía haber coaliciones, pero sólo respondían a razones electorales coyunturales, porque no había un sistema institucional que forzara a coaliciones mayoritarias. Por lo tanto el drama del país es que durante treinta o cuarenta años gobernaron gobiernos minoritarios. Y la Unidad Popular no fue una excepción a esta regla.

Un tercer problema radica en que había una cultura política con elementos contradictorios. Por una parte, se favorecía la negociación y la transacción parlamentaria. Al respecto, una de las críticas que hacían los ortodoxos de izquierda en otros continentes era el escándalo que significaba que en un mismo ascensor del Senado bajaran tomados del brazo un diputado de izquierda con un diputado de derecha que habían estado discutiendo en el hemiciclo hacía poco rato. La verdad era que una de las tendencias de la cultura política era la negociación, y esto por una razón muy simple: como nadie era mayoría, había que estar permanentemente negociando, concertándose y llegando a acuerdos.

Por otra parte, la cultura política presentaba una clara tendencia a los proyectos globales y excluyentes, es decir, una extremada ideologización. Había, por ejemplo, un movimiento social sindical y un movimiento político partidario, que combinaban en forma notable el instrumentalismo más exacerbado con el total ideologismo. La demanda puntual y la búsqueda del socialismo eran las dos reivindicaciones del movimiento sindical. Y ambas exigencias iban juntas.

Cuando señalo que hay proyectos excluyentes e ideologismos, lo que estoy diciendo es que todos los actores, incluidas las FFAA, son potencialmente revolucionarios. Todos tie-

nen la idea de un proyecto global, que pasa por tomar el poder del Estado y realizar desde ahí las grandes transformaciones de la sociedad y hacer a todo el mundo feliz. Esto se da en la derecha, en el centro y en la izquierda. Y esta visión revolucionaria es potencialmente antidemocrática, porque al final entre la negociación y "mi" verdad, se puede optar por esta última y mantenerla a cualquier precio.

Este ideologismo hizo que la tendencia a la polarización fuera muy grande y que contrarrestara la tendencia a la negociación, porque entre proyectos ideológicos globales no se negocia. Es por esta razón que afirmo que teníamos una cultura política contradictoria.

Otro elemento contradictorio consistía en que, por una parte, el régimen político democrático era un régimen legítimo, es decir, la gente creía en él y no postulaba otro. Y los que postulaban otro eran minorías, que ante un acto electoral debía plegarse a esta legitimidad masiva. Por otra parte, ésta era una legitimidad mucho más instrumental que valórica; es decir, estaba en gran parte basada en el cálculo de los distintos actores respecto a la capacidad de la competencia para satisfacer sus intereses. En cualquier caso, incluso una legitimidad de este tipo es mejor que no tener ninguna. Sin embargo, una legitimidad puramente instrumental, que no esté asentada en una valoración de la democracia como fin y no sólo como medio para satisfacer otros intereses, tiene una debilidad. Y esta debilidad consiste en que en determinados momentos, en momentos de crisis, puede despertarse la tentación para diversos sectores de adoptar otros medios para obtener sus propósitos.

Tales eran, pues, los elementos positivos y los elementos críticos que tenía la democracia chilena. Estos últimos son factores potenciales de crisis políticas más profundas.

LA DEMOCRACIA EN 1970 Y EN 1973

La gran interrogante es cómo se presentaba la situación de estos elementos en 1970. Pienso que en 1970 no existía una crisis de legitimidad del régimen democrático. Había muchas cosas en crisis; por ejemplo, había una crisis de relación entre el modelo de desarrollo y la democratización social. Algunos afirmaban que el modelo de desarrollo estaba impidiendo que hubiera acumulación, y otros mantenían que el modelo de desarrollo estaba impidiendo que hubiera democratización social. También estaba en crisis de legitimidad el modelo de la vía capitalista, la vía de industrialización por sustitución de importaciones con participación del Estado, etc. Ese modelo estaba en crisis y todos querían cambiarlo, en uno u otro sentido, como lo prueba la campaña presidencial de 1970. También estaba de algún modo en crisis la conducción política de los partidos que habían estado en el Gobierno hasta ese momento. En ese sentido, la izquierda aparecía con plena legitimidad para tener una oportunidad que todos los otros sectores políticos habían tenido.

Pero lo que no está en crisis es el régimen democrático en cuanto tal. Todo el mundo está por los cambios, pero finalmente todo el mundo, se haya dicho lo que se haya dicho al respecto en el Congreso de Chillán del Partido Socialista en 1967, o en cualquier otro lugar, va a las elecciones, porque la gente cree en el sistema político como el lugar donde se resuelven los conflictos políticos.

No es esto lo que ocurre en 1973. La interrogante que debemos solucionar es cómo pasamos de una crisis parcial de la sociedad -porque el régimen democrático no estaba en crisis de legitimidad- a la crisis total. En otras palabras, cómo podemos explicar la crisis de legitimidad del sistema, es decir, que la gente, y aquí incluyo todos los actores más significativos del proceso político, deje de creer en el régimen democrático.

A mi juicio, lo que ocurre entre 1970 y 1973 es que todos los actores se comportan en tal forma, que tienden a erosionar la institucionalidad y, por lo tanto, la legitimidad del sistema democrático. Veamos el comportamiento de estos diferentes actores.

La estrategia de la Unidad Popular para realizar las transformaciones que había prometido era estrictamente legal. Sin embargo, rompía los principios de legitimidad basados en la negociación. El Decreto Ley Nº 520, que permite la intervención estatal en las empresas en ciertas condiciones, y los decretos de insistencia firmados por todos los ministros, existían y eran legales; pero obviamente su aplicación rompía la tradición de negociación parlamentaria en torno a un acto de expropiación o cualquier otro hecho de importancia.

Por lo tanto, la estrategia elegida por la Unidad Popular tiene el efecto de erosionar la legitimidad del sistema, que estaba basada en la idea de la transacción y de la negociación. En este sentido, la Unidad Popular fue continuadora de todos los proyectos políticos significativos que habían existido en Chile: proponerse y prometer cambios sociales sin poseer una estrategia de construcción de mayorías para realizarlo, que es el fundamento de todo proceso revolucionario. Pero en este caso, ade-

Hacia el término de los "Mil Días de la Unidad Popular", la prensa instigó el debate político, alertando a los partidarios y adversarios del Gobierno sobre una posible guerra civil.

¡PLAN ANTICHILENO DE LOS GOLPISTAS: DEVOLVER EL COBRE!

EL SIGLO

primer activista de la revolución chilena

PARTIDO COMUNISTA LLAMA AL PUEBLO

¡CADA CUAL EN SU PUESTO DE COMBATE!

más, llevar a cabo tales cambios.

También habria sido imposible para la derecha llevar a cabo el programa de la Nueva República en un régimen democrático, y por eso tuvo que esperar el advenimiento del Régimen Militar, para ponerlo en marcha bajo la conducción del propio Pablo Baraona. Recuérdese, por otra parte, el programa de Tomic (que logró el 28% de la votación popular en septiembre de 1970) era, en sus propios términos, realizar la revolución pendiente y terminar con "el capitalismo y el neoliberalismo". Todos los actores, sin excepción, proponían proyectos revolucionarios sin tener una estrategia viable de construcción de mayorías.

En el caso particular de la Unidad Popular, esta coalición se plantea un programa de una envergadura enorme, con el mismo déficit. Porque, en este caso, la estrategia significaba un acuerdo con la Democracia Cristiana. Se podrá decir que este acuerdo era imposible, que la Democracia Cristiana no quería hacerlo; en fin, pueden darse muchas razones, no hubo una estrategia para construir una mayoría. Por tal razón, el programa de la Unidad Popular generará un deterioro de la institucionalidad y de legitimación del sistema anterior.

Por parte de la derecha, hubo al menos dos intentos clave: -uno por la vía insurrecional y el otro por la vía de un "resquicio legal"- para romper la tradición política del país. El primero es la conspiración que termina con el asesinato del general René Schneider; el otro, la propuesta de don Jorge Alessandri para ser electo en el Congreso Pleno, renunciar y llamar de inmediato a nuevas elecciones. Tales intentos, aunque no se hayan llevado enteramente a cabo o que hayan fracasado, existieron y sobre esto no cabe ninguna duda. Ellos apuntan a una opción muy temprana, que deberá desenvolverse en el tiempo: el término o derrocamiento del Gobierno de Allende.

La idea del derrocamiento del Presidente Allende existe en núcleos norteamericanos aún antes de las elecciones de septiembre de 1970 y en sectores de derecha, al menos desde su elección a la primera magistratura en septiembre de 1970; otra cosa es que no haya sido mayoritaria en el bloque opositor. Y no es mayoritaria al interior de la oposición, entre otras cosas por la fuerza de la legitimidad del régimen democrático. Existe, sin embargo, una estrategia de derrocamiento desde el primer momento que proviene de la derecha, que aprovechará posteriormente todo tipo de estrategias. Hay estrategias estrictamente legales o constitucionales, como es el intento de obtener la mayoría para derrocar constitucionalmente al Presidente, aunque lo cierto es que ellas ponen el enfrentamiento fuera de la tradición política chilena, y, por lo tanto contribuyen a agravar la crisis de legitimidad institucional preparando su desborde y destrucción. Pero también hay otras que no son abiertamente ilegales, como fueron todas las estrategias de boicot económico, o los atentados que se realizaron en 1973, u otros hechos, como la denuncia del fraude electoral en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Todo el mundo sabe que no hubo tal fraude, pero se afirmó su existencia, con el fin de socavar la legitimidad del sistema electoral como mecanismo arbitral.

Si de parte del Gobierno se usaron todos los procedimientos para cumplir a toda costa con el programa, de parte de la oposición se usaron todos los procedimientos para erosionar y terminar con el régimen de la Unidad Popular.

Los demócratacristianos no dejan de tener una alta responsabilidad en la crisis de legitimidad del sistema democrático. Ellos ponen en juego una estrategia de neutralización de los dos bandos, basada solamente en un cálculo electoral, estrategia que podría definirse como

asegurar inicialmente la continuidad del régimen para aprovechar el desgastamiento del gobierno de modo de asegurar su reemplazo. Más adelante, en el clima de polarización, la Democracia Cristiana no tiene alternativa frente a la estrategia de derrocamiento, y es arrastrada a ella. De hecho, la estrategia insurreccional de la derecha no se hace en nombre de los intereses y proyectos reales que ésta defendia, sino que se acude al concepto proporcionado por la Democracia Cristiana: defender "la democracia y la libertad".

No hay un solo actor, con excepción, en ciertos momentos, de la Iglesia, que apueste al sistema, que apueste al pais, que apueste a la mantención del régimen como tal. Las estrategias son corporativistas o clasistas; se identifica el proyecto propio con los intereses nacionales. Si habia ideologia revolucionaria y obsesión de cumplimiento de su programa, con potencialidades no democráticas, en la izquierda, hubo un comportamiento revolucionario insurreccional no democrático en la derecha desde el inicio del Gobierno Popular, y una subsumisión objetiva de la Democracia Cristiana en el diseño derechista. Todos apuestan a su propio proyecto, y esto es lo que va generando un enorme deterioro de la legitimación del régimen.

Esta crisis en que cada uno apuesta a su propio proyecto y no en el pais, tiene expresiones institucionales. Llega un momento en que nadie cree en las reglas del juego. Como tampoco nadie cree en que se esté luchando por defender a la democracia cuando la Cámara de Diputados se pronuncia sobre la legitimidad del gobierno. Ese acuerdo es un llamado al golpe militar, aunque no todos los que lo suscribieron tuvieron esa intencionalidad y aunque otros de entre ellos explicitamente estuvieran en contra de una salida de fuerza. Y un llamado al golpe en ese momento no era estar por la defensa de la democracia.

Otra expresión institucional de esta crisis, para referirnos sólo a dos, es lo ocurrido con el principal conflicto ideológico-politico de la época. A fin de cuentas, éste era el problema de la propiedad de los medios de producción, es decir, la formación del área de propiedad social, a través de diversas formas de estatización. La aprobación del proyecto Hamilton -Fuentealba, que implicaba una reforma constitucional, consistia en obligar a la Unidad Popular a hacer las expropiaciones a través de una ley. La discusión en torno a los vetos presidenciales llevó a un problema de interpretación muy complejo respecto a la capacidad del Presidente de promulgar parte o el total de ese proyecto de ley. Normalmente, este tipo de conflicto debia resolverlo el Tribunal Constitucional, el que en esta ocasión se declaró incompetente. Con ello el conflicto institucional básico de la época queda sin resolución legitima o consensual.

Esta situación configura lo que se podria llamar una crisis global del régimen democrático, que no habia existido el año 1970. La crisis económica es, en este caso, estrictamente secundaria. La situación es todo lo contrario de lo que ocurrió en los años 1929-31, en que hubo un caso tipico de crisis politica provocada por una crisis económica. En este caso, en cambio, la crisis económica es estrictamente una derivación de la crisis politica que, por supuesto, luego repercutirá sobre la crisis política, polarizándola aún más. Pero la crisis económica es el resultado del comportamiento de todos los actores, no solamente del Gobierno. Si no, no se explica que el 12 de septiembre de 1973 los supermercados estuvieran llenos. Esto significa que boycot económico y acaparamiento habia.

Lo que he hecho hasta ahora es intentar explicar que hay una crisis del sistema politico, producto del comportamiento de todos los actores y no de una conspiración. O, si se quiere, producto del resultado de muchas conspiraciones. Lo cierto es que esto no explica el golpe, porque ante una crisis como esa puede haber diversos tipos de soluciones. El 11 de septiembre de 1973 se dio una solución, y lo que hay que hacer entonces es explicar por qué se adoptó esta salida y no otra, separando el problema del de la crisis de la democracia.

DE LA CRISIS AL GOLPE MILITAR

Esto nos lleva necesariamente a plantearnos lo siguiente: en una crisis de legitimidad global, en que nadie tiene el monopolio de la legitimidad ni nadie es legitimado por el otro, manda el que tiene la fuerza. No porque tenga la legitimidad o porque se lo hayan pedido, o porque la gente crea en él, sino porque tiene la fuerza. Estamos partiendo de la base que existe una crisis de legitimidad y si hay una crisis de legitimidad es que nadie cree en el otro y menos en las reglas del juego.

Tampoco la gente creia, como afirman algunos, que las FFAA fueran la reserva moral o baluarte de la nacionalidad. Eso es simplemente ideológico. Ninguna institución o sector es por si mismo la única reserva moral o el baluarte último de la nacionalidad. Pero lo que ocurre es que los militares como organización son los únicos que tienen la fuerza fisica e instrumental para intervenir en ese momento.

Quien tiene la concentración de fuerza y de poder cuando hay crisis de legitimidad, interviene por definición. Desde luego, esta intervención no es ni legal, ni constitucional, ni legítima, porque no hay legitimidad consensual en ese momento. En esto no hay que equivocarse En una situación como ésta, las FFAA intervienen porque tienen la fuerza para hacerlo.

Surge entonces la pregunta de cuál es el carácter y la naturaleza de las FFAA que pueden realizar esta intervención. Para contestar esta interrogante, debemos examinar cómo y de qué manera se insertaban las Fuerzas Armadas en la sociedad y en la política nacional. Y nos encontramos que el tipo de inserción decidido por la élite dirigente a través de acuerdos político-institucionales era un tipo de relación cívico-militar muy particular y que no existió en otros países de América Latina: **el modelo de enclaustramiento.**

El modelo de enclaustramiento significa que las FFAA son confinadas a las tareas que les son definidas como propias, porque la sociedad tiene sus propios mecanismos legítimos de resolución de conflictos, sin necesidad de recurrir al poder armado. Para eso tienen que elaborar, como todo grupo humano, una ideología, es decir, una manera de representar lo que se está haciendo. Y si un grupo o sector determinado está simplemente dedicado a la mantención de una institución, porque no hay guerra, no puede justificar una ideología basada puramente en la defensa del territorio y la soberanía. En consecuencia, la ideología que se desarrolla en las FFAA -y las ideologías son siempre mezcla de verdades y de autojustificaciones- es la ideología profesionalizante y constitucionalista, porque ésta es la que mejor da cuenta de su realidad y no porque los uniformados sean por esencia una u otra cosa.

Pero aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta: estas FFAA enclaustradas, aisladas por la clase política, son FFAA que se caracterizan por una constante: su vinculación a través de la participación de sus oficiales en cursos e institutos, consagrados por tratados bi o multilaterales, al sistema de defensa hemisférica, hegemonizado por los Estados Unidos. Ahí se fue gestando la ideología de Seguridad Nacional, propia de la Guerra Fría, de la división del mundo en bloques y de la incorporación de América Latina en el bloque dirigido por los Estados Unidos.

Este sistema impuso la enseñanza de una cuestión muy importante, que a la vez resuelve la crisis de identidad que sufren las FFAA en la segunda mitad de este siglo, producida por el término de la necesidad de asegurar la defensa nacional y la constitución de estados nacionales. Lo que se les inculca es que ellas son las garantes del mundo libre y occidental frente a posibles agresiones, que no van a venir directa o militarmente de la Unión Soviética, sino que a través de fuerzas subversivas que surgen en el interior de cada país, como lo había probado la Revolución Cubana.

Por lo tanto, las FFAA internalizan la idea que ellas son la reserva moral de la nación y la mejor garantía de la unidad nacional.

En países escindidos y desgarrados por confrontaciones internas sin marco institucional consensual, los militares podían querer ver en esta doctrina un reflejo inmediato de la realidad. Pero en un país como Chile, en que la clase política resuelve bien sus conflictos y donde además, derecha, centro e izquierda, disputan, pero negocian como hemos dicho, las FFAA no constituyen, más que otros sectores o instituciones, reserva moral especial alguna.

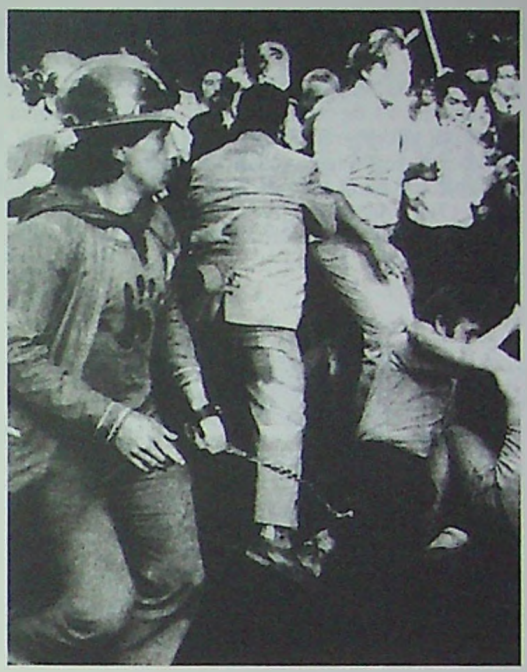
Este concepto permanece en nuestro país como una idea latente, para ser aplicada en momentos de crisis. Queda como reserva ideológica para cuando haya que intervenir. Pero la intervención dependerá de lo que pase en la sociedad.

En 1970, cuando se le plantea a las FFAA su posible intervención en el problema político por parte de algunos impacientes, como se les calificó en aquella época, contestan que no tienen nada que hacer. Existe una Constitución, y ha habido una elección legítima y, por lo tanto, la situación pertenece a la clase política.

Otra es la situación que se plantea en 1972, cuando a propósito del Paro de Octubre, se pide a las FFAA que ingresen al Gobierno. Aparece entonces un primer esbozo de un proyecto propio, en el cual se incluye el concepto de garantes de la constitucionalidad, lo que significa en ese momento defender al Gobierno legítimo. Con todo, en ese momento no existe una crisis de legitimidad global del gobierno ni de los distintos poderes del Estado.

En 1973, en cambio, a las FFAA se les plantean dos proyectos. El primero de ellos les señala el cumplimiento de su deber constitucional; es decir, las Fuerzas Armadas serán las que repriman la insurrección desatada por los sectores más duros de la oposición al Gobierno, respaldando al mismo y subordinadas a éste. El segundo proyecto les impulsa a tomarse el poder para resolver autónomamente la crisis. Esas son las dos opciones propuestas.

Es obvio que algo ha sucedido al interior de las FFAA entre octubre de 1972 y septiembre de 1973. Se ha dejado de lado un proyecto institucional de apoyo a la Constitución y a un Gobierno constitucional en problemas, para adoptar el segundo proyecto, aquel que les



La violencia llegó a ser una constante en la vida cotidiana de la ciudadanía.

permite tomarse el poder y hacerse cargo de la nación.

Señalar a la doctrina de seguridad nacional como causa de este cambio es referirse solamente a un fundamento ideológico. Pero lo que realmente gatilla y activa el proyecto subversivo no puede definirse sino como una conspiración en el seno de las FFAA .

Algunos pueden decir francamente que están de acuerdo con que hubiese habido una conspiración y que ésta era necesaria, e incluso otros la podrán justificar expresando que era la única salida que quedaba al conflicto. Lo que no se puede decir es que no existió una conspiración, que, como dice el diccionario, es "la acción de conspirar, unirse algunos contra su superior o soberano, o contra un particular, para hacerle daño".

El problema se torna complicado para las FFAA porque, o quien dirige el golpe militar acepta participar en él a última hora, con lo cual lo que cuenta en el libro *El Día Decisivo* sería falso, o quien dirige el golpe participa en la conspiración, con lo cual le habría tenido que mentir durante largo tiempo al poder constitucional legítimo que es el Presidente. En todo caso, en algún momento se tendría que haber mentido al Presidente para ocultar ya fuera el desarrollo, ya fuera la ejecución del golpe. Este es el verdadero dilema, que sólo se explica aceptando que quienes dirigen el golpe tienen que traicionar. Y lo que pasa en Chile en 1973 es el producto de una **traición**.

¿En que consiste, técnicamente, una traición? No estoy haciendo imputaciones morales, sino un análisis lo más objetivo posible. Por traición entiendo el uso que alguien hace de la confianza que le otorgó otro para destruirlo. La traición no es una simple deslealtad. Hay muchos opositores al gobierno de Allende y muchos que estuvieron por el golpe militar pero que nunca traicionaron a nadie, porque nunca fueron investidos por el Presidente Allende con algún cargo ni nunca él les concedió su confianza. Y, como bien lo recuerda el poeta Raúl Zurita -porque a veces los poetas nos dicen más verdades que los analistas y que los políticos- en toda gran tragedia hay siempre una traición en su origen. El teatro griego, o el teatro shakesperiano, de lo que nos hablan es precisamente de traiciones. Las grandes obras literarias sobre el drama y la condición humana, como el teatro griego o el shakesperiano, nos hablan precisamente de traiciones.

El golpe militar tiene su origen en una traición. Este hecho explica la distancia que media entre la crisis de la democracia y el golpe militar.

DEL GOLPE AL PROYECTO CONTRARREVOLUCIONARIO

Una última observación sobre el paso del golpe militar al Estado de golpe, es decir, al Régimen Militar propiamente tal. Cualquiera hubiese sido la ideología de quienes dieron el golpe, había dos tareas inmediatas que tenían que resolver:

Primero, tenían que estabilizar la economía. Obviamente no lo iban a hacer con criterio socialista, porque para eso habrían apoyado al gobierno de Allende. Era evidente que la vía elegida sería la recomposición del sistema capitalista.

La segunda tarea consistía en contener, reprimir y detener a la gente que había apoyado al Gobierno de la Unidad Popular. En otras palabras, la represión sistemática y, por lo tanto, la DINA o quien cumpla sus funciones, son intrínsecas, esenciales al golpe y régimen militar y no casualidades, excesos o errores. A su vez, un organismo centralizado de inteligencia y represión eran requerimientos de un poder personalizado en el interior de las FFAA, sobre todo si pensamos que en un golpe de tipo conspirativo hay visiones y proyectos distintos sobre lo que se quiere hacer. Si el golpe necesitaba al Comandante en Jefe para efectuarse, cuando éste pasa a ser Jefe de Estado, su legitimidad "política" puede ser puesta en duda por parte de algunos oficiales que tengan concepciones políticas distintas. Es decir, los organismos represivos y de inteligencia se usan en

estos casos no sólo contra la sociedad, sino al interior de las propias instituciones del régimen.

A partir de estas tareas se hacen presentes, no la globalidad de un proyecto que debe durar diecisiete años, pero si los elementos de éste: El régimen tendrá que ser autoritario y tendrá que ser de refundación capitalista, para que deshaga la forma de vinculación entre economia y politica que existia hasta entonces.

Surge ahora una segunda conspiración, que es una conspiración "desde adentro". Una vez que se tiene el poder, habrá que conspirar para hacer que un determinado proyecto domine sobre los otros. Y en esta segunda conspiración no van a estar solamente los sectores militares, sino que va a haber sectores civiles involucrados, y cada uno de ellos con un proyecto diferente. Porque es evidente que lo que querian algunos que dirigian la economia en 1973, no era exactamente lo mismo que se va a imponer cuando un grupo asuma el control total de la politica económica a partir de abril de 1975, por dar un ejemplo.

Y, cuando no hay un régimen democrático, los conflictos entre diversas visiones pasan a ser necesariamente conspiraciones para imponer uno u otro proyecto, acuerdos de unos a espaldas de otros. Esto es obvio, no puede ser de otra manera.

Es entonces cuando se produce una segunda traición, que es la traición del núcleo civil y militar que va a dirigir el proyecto politico y económico del régimen al resto de la gente que apoyó el golpe, y que lo apoyó sin querer necesariamente un largo régimen ni menos el proyecto que ahora se les imponia.

CONCLUSION

En sintesis, no podemos analizar el 11 de septiembre de 1973 sin hacer referencias complejas al menos a estos tres aspectos: a) crisis de la democracia con responsabilidades compartidas, aún cuando esto no explica el golpe; b) golpe militar que supone una conspiración al interior de las FFAA, y c) proyecto contrarrevolucionario o revolucionario -como se le quiera llamar- que supone una conspiración al interior del núcleo que ha obtenido el poder.

A mi juicio, las enormes dificultades de ciertos sectores para no seguir repitiendo justificaciones de hace veinte años y para tratar de analizar y comprender lo que sucedió en aquella época, se explican porque cuesta enormemente hacerse cargo que formamos parte de una época que nació fundada en la traición.

NOTAS

1 Exposición realizada en el Seminario "A Veinte Años del 11 de Septiembre de 1973", organizado por la Universidad Finis Terræ en 1993.

2 Retomo aqui ideas desarrolladas en mi trabajo publicado en el libro *La Crisis de la Democracia en Chile. Antecedentes y Causas*, Matias Tagle, ed. (Santiago: Ed.Andrés Bello, 1992).